Proyecto de Ley N° 627/2021-CR

CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Área de Trámite y Digitalización de Documentos
04 NOV 2021
RECIBIDO
Hora 10:38 am
Firma

La Congresista de la República que suscribe, **NORMA YARROW LUMBRERAS**, integrante del Grupo Parlamentario Avanza País, ejerciendo el derecho que le confiere el artículo 107° de la Constitución Política del Perú, en concordancia con los artículos 75° y 76° del Reglamento del Congreso de la República, presenta el siguiente proyecto de ley:

PROYECTO DE LEY QUE FORTALECE LA FUNCIÓN FISCALIZADORA DE LOS CONSEJOS REGIONALES Y CONCEJOS MUNICIPALES

Artículo 1. Objeto de la Ley

La presente ley tiene por objeto fortalecer el ejercicio de la función de fiscalización en gobiernos regionales y gobiernos locales, para lo cual se modifica diversos artículos de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y de la Ley 27687, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en especial las vinculadas a las atribuciones y responsabilidades de concejos municipales y consejos regionales.

Artículo 2. Modificación de los artículos 9, 10, 13, 20, 29 y del artículo 41 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades

Modifíquese los artículos 9, 10, 13, 20, 29 y 41 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, e incorpórese del artículo 119-A, de conformidad con los siguientes textos:

"Artículo 9. ATRIBUCIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL

Corresponde al concejo municipal:

(...)

22. **Fiscalizar la gestión pública de la municipalidad, así como la gestión y conducta pública de los servidores civiles de la municipalidad, en especial de los funcionarios y directivos públicos; y, dentro de ello, llevar a cabo investigaciones sobre cualquier asunto de interés público local.**

El Concejo Municipal está facultado para:
22.1 Designar comisiones investigadoras para esclarecer hechos, formular recomendaciones orientadas a corregir normas o políticas; y en el caso de encontrar indicios razonables de responsabilidad funcional o delito, ponerlo en conocimiento de la autoridad competente.
22.2 Solicitar al Alcalde o al Gerente Municipal información sobre temas específicos, con arreglo a sus atribuciones y funciones, con el voto favorable de un tercio del número legal de regidores. El Alcalde o el Gerente Municipal están obligados bajo

responsabilidad a responder el pedido de información en un plazo no mayor a 10 días hábiles, bajo responsabilidad administrativa.
22.3 Fiscalizar la implementación de recomendaciones derivadas de las acciones de control del órgano de control institucional, de las sociedades auditoras y de la Contraloría General de la República; así como también de los procedimientos de investigación impulsados por el Concejo Municipal y por el Congreso de la República, en lo que resulte pertinente.

(...)

33. Fiscalizar la gestión de los funcionarios de la municipalidad, para lo cual podrá invitar a cualquier funcionario de la Municipalidad para informar ante el Pleno del Concejo sobre temas específicos previamente comunicados, con el voto favorable de un tercio del número legal de regidores.

35. Elaborar un informe que contenga el Balance Anual sobre la ejecución presupuestaria de los recursos asignados para el fortalecimiento de la Función Fiscalizadora. Este Informe será publicado en la página web de la municipalidad y presentado semestralmente a la Contraloría General de la República, utilizando el sistema que esta entidad desarrollará para tal fin.

36. Designar al secretario técnico del Procedimiento Administrativo Disciplinario y al Coordinador de la Unidad Funcional de Integridad Institucional.

37. Las demás que le correspondan de acuerdo con ley."

"Artículo 10. ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LOS REGIDORES

Corresponden a los regidores las siguientes atribuciones y obligaciones:

(...)

4. Desempeñar funciones de fiscalización de la gestión municipal ***y contar con los recursos que le permitan dotarse de la capacidad logística y apoyo profesional necesario, para el cumplimiento de dicho fin, los mismos que son asignados por la entidad.***
(...)

Las acciones de fiscalización que se desarrollen en el marco del numeral 4. podrán realizarse sin que sea necesaria comunicación previa respecto de su ejecución.

Los pedidos de información realizados por los regidores, en ejercicio de su función fiscalizadora, deben ser atendidos en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles bajo responsabilidad administrativa. Este plazo puede prorrogarse en forma excepcional por cinco (5) días hábiles adicionales, siempre que medien circunstancias que dificulten la

obtención de la información solicitada. Las razones por las que se hace uso de dicha prórroga deben comunicarse al regidor solicitante, por escrito y antes del vencimiento del primer plazo."

"ARTÍCULO 13. SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL

(...)
El concejo municipal se reúne en sesión ordinaria no menos de dos, ni más de cuatro veces al mes, para tratar los asuntos de trámite regular. ***Las sesiones ordinarias son convocadas con al menos cinco (05) días hábiles de anticipación; deben realizarse en el local de la entidad y en horario de oficina, bajo responsabilidad administrativa."***

"Artículo 20. ATRIBUCIONES DEL ALCALDE

Son atribuciones del alcalde:

(...)
3. Ejecutar, ***bajo responsabilidad***, los acuerdos del concejo municipal ***de conformidad con el Plan de Implementación que formará parte del acuerdo aprobado*, según corresponda;**
(...)
17. Designar y cesar al gerente municipal y, a propuesta de éste, a los demás funcionarios de confianza, ***quienes deberán cumplir con los requisitos previamente establecidos en el perfil de cada puesto.***
(...)
35. ***Convocar, bajo responsabilidad, como mínimo a dos audiencias públicas distritales o provinciales al año, según su competencia jurisdiccional.***
36. Las demás que le correspondan de acuerdo con ley."

"Artículo 29. PROCURADURÍAS PÚBLICAS MUNICIPALES

(...)
Los procuradores públicos municipales son funcionarios designados por el alcalde y dependen administrativamente de la municipalidad, y funcional y normativamente del Consejo de Defensa Judicial del Estado. ***Informan permanentemente al Concejo Municipal, debiendo remitir a dicho órgano, al menos un informe cada trimestre, sobre el estado de los casos judiciales a su cargo. Sus informes son públicos.***
(...)"

"Artículo 41. ACUERDOS

Los acuerdos son decisiones que toma el concejo, referidas a asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional.

Los acuerdos aprobados, cuando así lo indiquen, incluyen la elaboración de un Plan de Implementación que establezca las acciones a realizar con sus respectivos plazos y los mecanismos de financiamiento, según corresponda."

Artículo 3. Incorporación del artículo 119-A la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972

Incorpórese el artículo 119-A dentro del capítulo II del Título VIII de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, conforme al siguiente texto:

"Artículo 119-A. Audiencias Públicas Municipales

Las audiencias públicas constituyen mecanismos de rendición de cuentas cuyo objetivo es dar a conocer la gestión del gobierno local, tanto en los aspectos presupuestales, como los logros de la gestión y las dificultades que impidieron el cumplimiento de algunos compromisos.

Los Gobiernos Locales realizan como mínimo dos audiencias públicas municipales al año, ***una en el mes de mayo y la otra en setiembre, con la finalidad de evaluar la ejecución presupuestal y ver la perspectiva de la institución con proyección al cierre de año.***"

Artículo 4. Modificación del literal b) del artículo 14, el literal s) y t) del artículo 15, el literal b) del artículo 16, el literal c) y o) del artículo 21, el artículo 39 y artículo 78, e incorporación de un párrafo final en el artículo 16 de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales

Modifíquese el literal b) del artículo 14, el literal s) y t) del artículo 15, el literal b) del artículo 16, el literal c) y o) del artículo 21, el artículo 39 y artículo 78, e incorporación de un párrafo final en el artículo 16 de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, conforme al siguiente texto:

"Artículo 14.- Sesiones
(...)
b. Régimen de sesiones
El Consejo Regional se reúne en sesiones ordinarias y extraordinarias, de acuerdo con lo que establece su Reglamento. Deberá reunirse como mínimo en una sesión ordinaria al mes. Adicionalmente se convocará a solicitud de un tercio del número legal de consejeros.

Las sesiones ordinarias serán convocadas como mínimo una vez al mes y con al menos cinco (05) días hábiles de anticipación. Deben realizarse en el local de la entidad y en horario de oficina, bajo responsabilidad administrativa del titular de la entidad."

"Artículo 15. Atribuciones del Consejo Regional

Son atribuciones del Consejo Regional:
(...)
s. ***Elaborar un informe que contenga el Balance Semestral sobre la ejecución presupuestaria de los recursos asignados para el fortalecimiento de la Función Fiscalizadora. Este Informe debe ser***

publicado en la página web del Gobierno Regional y presentado semestralmente a la Contraloría General de la República, utilizando el sistema desarrollado para tal fin.

t. ***Designar al secretario técnico del Procedimiento Administrativo Disciplinario y al Coordinador de la Unidad Funcional de Integridad Institucional.***

u. Las demás que les corresponda de acuerdo con Ley."

"Artículo 16. Derechos y obligaciones funcionales de los Consejeros Regionales

Son derechos y obligaciones funcionales de los Consejeros Regionales:

(...)

b. Fiscalizar los actos de los órganos de dirección y administración del Gobierno Regional u otros de interés general, ***formulando los pedidos de información que para tal fin resulten necesarios y contando con los recursos presupuestarios correspondientes que les permitan dotarse de la capacidad logística y apoyo profesional necesario para el cumplimiento de dicho fin, los mismos que son asignados por la entidad.***

(...)

Las acciones de fiscalización que se desarrollen en el marco del literal b. podrán realizarse sin que sea necesaria comunicación previa respecto de su ejecución.

Los pedidos de información realizados por los consejeros, en ejercicio de su función fiscalizadora, deben ser atendidos en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles bajo responsabilidad administrativa. Este plazo puede prorrogarse en forma excepcional por cinco (5) días hábiles adicionales, siempre que medien circunstancias que dificulten la obtención de la información solicitada. Las razones por las que se hace uso de dicha prórroga deben comunicarse al consejero solicitante, por escrito y antes del vencimiento del primer plazo."

"Artículo 21. Atribuciones

El Presidente Regional tiene las siguientes atribuciones:

(...)

c) Designar y cesar al Gerente General Regional y a los Gerentes Regionales, así como nombrar y cesar a los funcionarios de confianza, ***quienes deben cumplir con los requisitos previamente establecidos en el perfil de cada puesto, bajo responsabilidad administrativa.***

(...)

o) Promulgar las Ordenanzas Regionales o hacer uso de su derecho a observarlas en el plazo de quince (15) días hábiles y ejecutar los acuerdos del Consejo Regional, ***de conformidad con el Plan de Implementación que forma parte del acuerdo aprobado,*** **según corresponda.**

(...)"

"Artículo 39. Acuerdos del Consejo Regional
Los Acuerdos del Consejo Regional expresan la decisión de este órgano sobre asuntos internos del Consejo Regional, de interés público, ciudadano o institucional o declara su voluntad de practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional.

Los acuerdos aprobados, cuando así lo indiquen, incluyen la elaboración de un Plan de Implementación, estableciendo las acciones a realizar con sus respectivos plazos y los mecanismos de financiamiento, según corresponda.
(...)"

"Artículo 78. Defensa Judicial de los intereses del Estado
(...)
El Procurador Público Regional guarda relaciones de coordinación y cooperación con el Consejo de Defensa Judicial del Estado. Informa permanentemente al Consejo Regional, debiendo remitir a dicho órgano, ***al menos un informe cada trimestre***, sobre el estado de las acciones judiciales en defensa de los derechos e intereses del Estado a nivel regional y anualmente formula la memoria de su gestión. Sus informes son públicos."

Artículo 5. Modificación del artículo 24 de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
Modifíquese el artículo 24 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, conforme al siguiente texto:

"Artículo 24.- Audiencias públicas regionales
El Gobierno Regional realizará como mínimo dos audiencias públicas regionales al año, una en la capital de la región y otra en una provincia, en las que dará cuenta de los logros y avances alcanzados durante el período. ***Las mismas deben realizarse en los meses de mayo y setiembre de cada año, con la finalidad de evaluar la ejecución presupuestal y ver la perspectiva de la institución con proyección al cierre de año.***"

Artículo 6. De los recursos asignados a los Regidores Municipales y Consejeros Regionales para el fortalecimiento de las labores de fiscalización
Los recursos presupuestales con que cuentan los regidores municipales y consejeros regionales para el cumplimiento de lo previsto en el último párrafo de los artículos 2° y 3° de la presente ley, corresponden al monto que era asignado por la Entidad al Órgano de Control Institucional para el pago de profesionales, previo a su incorporación a la Contraloría General de la República, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30742, Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control, sin demandar recurso adicional al tesoro público.

En el caso de las Municipalidades Distritales que no cuenten con un Órgano de Control Institucional, se les destinará a los regidores municipales un mínimo de 0.5% del presupuesto devengado del año precedente.

Para el cumplimiento de esta disposición, los gobiernos locales mencionados quedan autorizados a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, quedando exceptuados de las restricciones presupuestarias establecidas en las leyes anuales de presupuesto, con la finalidad de poder transferir el monto establecido a favor del fondo para fortalecimiento de la función fiscalizadora.

Los regidores municipales y consejeros regionales estarán obligados a presentar un balance semestral sobre el monto proveniente del fondo para fortalecimiento de las labores de fiscalización, que hubieran utilizado durante ese periodo. La presentación del balance se hará mediante el Sistema que establezca la Contraloría General de la República para dicho fin.

Artículo 7. Modificación del numeral 27.2 del artículo 27 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado

Modifíquese el numeral 27.2 del artículo 27 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, conforme al siguiente texto:

"Artículo 27. Contrataciones Directas

(...)

27.2 Las contrataciones directas se aprueban mediante resolución del titular de la entidad, ***Resolución Ejecutiva Regional en el caso de los Gobiernos Regionales, Resolución de Alcaldía en el caso de los Gobiernos Locales o mediante Acuerdo del directorio, según corresponda. Las contrataciones directas aprobadas por el Alcalde y/o Gobernador Regional se encuentran sujetas a rendición de cuentas ante el respectivo Concejo Municipal y/o Consejo Regional, respectivamente.*** Esta disposición no alcanza a aquellos supuestos de contratación directa que el reglamento califica como delegable.

(...)"

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

PRIMERA. Modificación del artículo 92 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil

Modifícase el artículo 92 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, conforme al siguiente texto:

"Artículo 92. Autoridades

Son autoridades del procedimiento administrativo disciplinario:

(...)

Las autoridades del procedimiento cuentan con el apoyo de un secretario técnico, de preferencia abogado quien es designado mediante resolución del titular de la entidad. ***En el caso de los Gobiernos Regionales y locales, la designación del secretario técnico se hará mediante Acuerdo de Consejo Regional o Acuerdo del Concejo Municipal, según corresponda y en estos casos la designación es por un plazo de dos (02) años renovables por única vez por el mismo plazo.***
(...)"

SEGUNDA. Excepciones al acceso a Información en ejercicio de la función de fiscalización

Las excepciones al acceso a la información con fines de fiscalización serán, además de las comprendidas en la Constitución Política del Perú, las establecidas en los artículos 16 y 17 de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que regulan la información reservada y la información confidencial.

También está comprendida en las excepciones de acceso a la información en ejercicio de la función de fiscalización de regidores municipales y consejeros regionales, aquella protegida por la Ley N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales.

TERCERA. Procedimiento para la designación del Secretario Técnico del Procedimiento Administrativo Disciplinario y del Coordinador de la Unidad Funcional de Integridad Institucional

Para el caso de la designación del Secretario Técnico del Procedimiento Administrativo Disciplinario y del Coordinador de la Unidad Funcional de Integridad Institucional, el alcalde o gobernador según corresponda presentará una terna de candidatos al Concejo Municipal o Consejo Regional, de conformidad a lo dispuesto a la normatividad vigente. Sí ninguno de los nombres propuestos en la primera terna es aceptado, el alcalde o gobernador presentará una segunda terna para su aprobación. En el caso de que tampoco se designe a uno de los candidatos de la segunda terna, el alcalde o gobernador seleccionará uno de entre esta última terna.

CUARTA. Participación de la Contraloría General de la República en las Sesiones del Concejo Municipal y Consejo Regional

Los jefes de los Órganos de Control Institucional de las Municipalidades y Gobiernos Regionales, participan obligatoriamente en al menos una sesión al trimestre del Concejo Municipal y Consejo Regional respectivamente, con la finalidad de informar sobre las acciones de lucha contra la corrupción e inconducta funcional desplegadas y para tomar conocimiento de las denuncias que se presentan, y las cuales deben ser canalizadas y tramitadas de acuerdo a la normativa que establezca la Contraloría General.

QUINTA. Capacitación a consejeros regionales y regidores municipales por parte de la Escuela Nacional de Control

La Contraloría General de la República, a través de la Escuela Nacional de Control – ENC, capacita en materias de fiscalización y gestión pública a los consejeros regionales y regidores municipales, en el marco de lo establecido en la cuarta disposición complementaria final de la Ley N° 30742 – Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control.

SEXTA. Transferencias financieras para la ejecución de auditorías financieras en el marco de la Auditoría a la Cuenta General de la República

Los alcaldes y gobernadores, consejeros regionales y los regidores municipales que no aprueben mediante acuerdo de consejo regional y acuerdo de concejo municipal, respectivamente lo establecido en el artículo 20° de la Ley N° 30742 – Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control, son pasibles de sanción administrativa de acuerdo con la normativa aplicable.

SÉPTIMA. Implementación del Sistema de Control Interno

Dispóngase que con la finalidad de asegurar la adecuada gestión de los recursos públicos en los Gobiernos Regionales y en las Municipalidades Provinciales y Distritales, se culmine la implementación del Sistema de Control Interno como máximo hasta antes del 30 de junio de 2022. La implementación se hará cumpliendo con la normativa técnica emitida por la Contraloría General de la República para dicho efecto, siendo su inobservancia por parte del titular, causal de infracción grave pasible de sanción administrativa de acuerdo con la normativa aplicable, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar, de ser el caso.

La implementación del Sistema de Control Interno deberá ser considerado dentro del programa de incentivos a la mejora de gestión municipal, de conformidad a los Lineamientos aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas.

JOSÉ DANIEL WILLIAMS ZAPATA
Portavoz Titular
Grupo Parlamentario Avanza País
CONGRESO DE LA REPÚBLICA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. ANTECEDENTES

La presente propuesta legislativa se plantea en continuidad con los esfuerzos realizados en el Periodo Legislativo 2016-2021, donde se analizaron y debatieron diferentes proyectos de ley, que tenían por objeto el fortalecimiento de las capacidades de fiscalización de los consejos regionales y concejos municipales.

Al respecto, la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, en su Tercera Sesión Extraordinaria, celebrada el 9 de mayo de 2017, aprobó por mayoría el dictamen recaído en el Proyecto de Ley N° 769/2016-CR, sobre la Ley que fortalece las capacidades de fiscalización de los consejos regionales y concejos municipales[1].

Posteriormente, fueron presentados nuevos proyectos de ley sobre la citada temática, por parte de los señores congresistas; del Poder Ejecutivo; y de la propia Contraloría General de la República, que en virtud de su facultad de iniciativa legislativa conferida mediante el artículo 107 de la Constitución Política del Perú, concordante con lo previsto en el literal h) del artículo 32º de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, así como acorde con lo dispuesto en los artículos 74º y 75º del Reglamento del Congreso, mediante el Oficio Nº 381-2021-CG/DCC del 26 de abril del 2021, presentó el Proyecto de Ley Nº 7680-2021/CR *"Ley que fortalece la función fiscalizadora de los consejos regionales y consejos municipales"*.

En este sentido, la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, en su Décima Octava Sesión Extraordinaria, celebrada el 5 de julio de 2021, aprobó un Texto Sustitutorio del dictamen recaído en el Proyecto de Ley 769/2016-CR, que propone el fortalecimiento de las capacidades de fiscalización de los consejos regionales y concejos municipales; incorporando en dicho Texto Sustitutorio los Proyectos de Ley 3360/2018-CR, 4195/2018-PE, 4781/2019-CR, 6331/2020-CR, 6436/2020-CR, 7129/2020-CR, y 7680/2020-CGR[2], los cuales abonan sobre la misma materia y añaden nuevas e importantes propuestas.

Mediante acuerdo Nº 019-2021-2022/CONSEJO-CR del 17 de agosto de 2021, el Consejo Directivo del Congreso definió el tratamiento de los instrumentos parlamentarios del periodo parlamentario 2016-2021, estableciendo que todas las iniciativas que quedaron pendientes de trámite al concluir el periodo parlamentario 2016-2021, cualquiera que sea su estado procesal, pasen al archivo; señalando que para el caso de las iniciativas legislativas con origen distinto al Congreso pueden ser actualizadas o presentadas como nuevas

---

[1] Portal del Congreso de la República. Expediente Virtual Parlamentario. https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Dictamenes/Proyectos_de_Ley/00769DC08MAY20170522.pdf

[2] Portal del Congreso de la República. Expediente Virtual Parlamentario. https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Oficios/Comisiones_Ordinarias/OFICIO-1671-2020-2021-CDRGLMGE-GVT-CR.pdf

iniciativas, si hubieran sido archivadas de plano o rechazadas.

Por lo expuesto, se plantea la presente iniciativa legislativa, al ser un tema de interés nacional para fortalecer la función fiscalizadora de los consejos regionales y concejos municipales.

II. PROBLEMÁTICA

El proceso de descentralización impulsado en el Perú en las últimas décadas, le ha dado mayor relevancia a los Gobiernos Locales y Regionales en el desarrollo del país; dotándolos de mayores funciones, competencias, así como también de mayores recursos; sin embargo según el documento elaborado por la Contraloría General de la República y la GIZ, titulado, "Orientaciones Básicas para el Fortalecimiento del Control Interno en Gobiernos Locales" [3] este crecimiento de la economía municipal y regional, no ha estado acompañado de respuestas legales que permitan desarrollar capacidades para adaptarse a las exigencias que implica la nueva realidad.

Los gobiernos regionales y locales enfrentan en la actualidad una serie de problemas de gobernabilidad, incluyendo una alta incidencia de conflictos al interior de estos, así como la proliferación de denuncias de corrupción en contra de sus autoridades.

Los gobiernos locales han sido objeto de muchos cambios, muy acelerados, en las últimas décadas, "donde se cruzan un entusiasmo municipalista —que reconcentra decisiones en el alcalde frente a su Concejo e incrementa atribuciones y presupuestos sin alterar consistentemente el resto del aparato público— y un entusiasmo por el hecho de que la ciudadanía sea más libre de construir nuevas listas electorales, pueda revocar más fácilmente alcaldes y cuente con más ámbitos de participación que limiten la discrecionalidad del alcalde y su Concejo".[4]

"Frente a dicho escenario, varios países latinoamericanos emprendieron reformas constitucionales en las que, entre otros cambios, se incorporaron mecanismos de participación ciudadana"[5] como la vacancia y la revocatoria de mandato. Perú las incorporó en su Constitución de 1993 junto con otros instrumentos de democracia directa, aunque con alcance limitado a las autoridades de los ámbitos regional y local.

Sin embargo, los resultados de la repetida y frecuente aplicación de este instrumento participativo en nuestro país no han sido del todo positivos en lo que se refiere al fortalecimiento del control ciudadano o frente a las crisis de legitimidad de gobernantes. *"Por el contrario, entre sus deficiencias destaca un indeseable uso político-electoral del mecanismo por parte de ex y/o futuros*

---

[3] https://apps.contraloria.gob.pe/wcm/control_interno/documentos/Publicaciones/Orientaciones_basicas_CI_Gobiernos_Locales.pdf

[4] REMY, María Isabel. Los gobiernos locales en el Perú: entre el entusiasmo democrático y el deterioro de la representación política.

[5] EBERHARDT, María Laura. Revocatoria de mandato en Perú: diseño institucional y resultados de su aplicación. En *Revista Derecho del Estado.*

candidatos a ocupar los cargos, que redundó en graves problemas de gobernabilidad a nivel local. Ello, al punto de motivar una importante reforma en el diseño institucional de esta herramienta tras largos años de implementación".

Durante el 2018, un total de 101 gobernadores, consejeros regionales, alcaldes y regidores fueron suspendidos o vacados de sus cargos por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) debido a que se encontraban implicados en casos de corrupción a nivel judicial, según información de **Convoca.pe**.[6] Ese número de autoridades regionales y municipales incurrieron en 5 de las 19 causales de suspensión o vacancia precisadas en la Ley Orgánica de Municipalidades y Gobiernos Regionales.

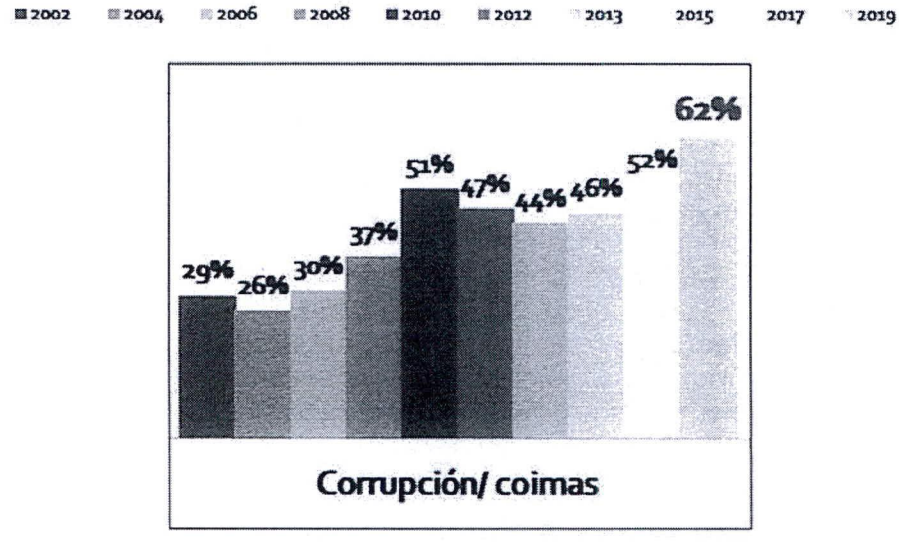
Estas cifras implican un incremento de más de 120% de autoridades regionales y municipales que tuvieron que dejar sus puestos por suspensión o vacancia relacionados a corrupción, respecto al 2017. Es decir, el aumento fue de 59 casos que fueron resueltos en última instancia por el órgano electoral en base a resoluciones judiciales.[7]

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Corrupción de Proética, elaborada por IPSOS en setiembre del 2019[8], la percepción de la corrupción como problema nacional se ha incrementado, sobre todo en el interior del país.

La corrupción se mantiene como segundo problema más importante del país, ahora con 62%. Tendencia va en aumento desde el 2013.

Proetica IEP

¿Cuáles de los siguientes son los tres principales problemas del país en la actualidad?- RESPUESTA ASISTIDA- MÚLTIPLE MÁXIMO 3 OPCIONES
MEDICIÓN COMPARATIVA



[6] "Más de 100 Autoridades Municipales y Regionales fueron vacadas o Suspendidas por Corrupción en 2018". Revisado en: https://convoca.pe/agenda-propia/mas-de-100-autoridades-municipales-y-regionales-fueron-vacadas-o-suspendidas-por

[7] Idem.

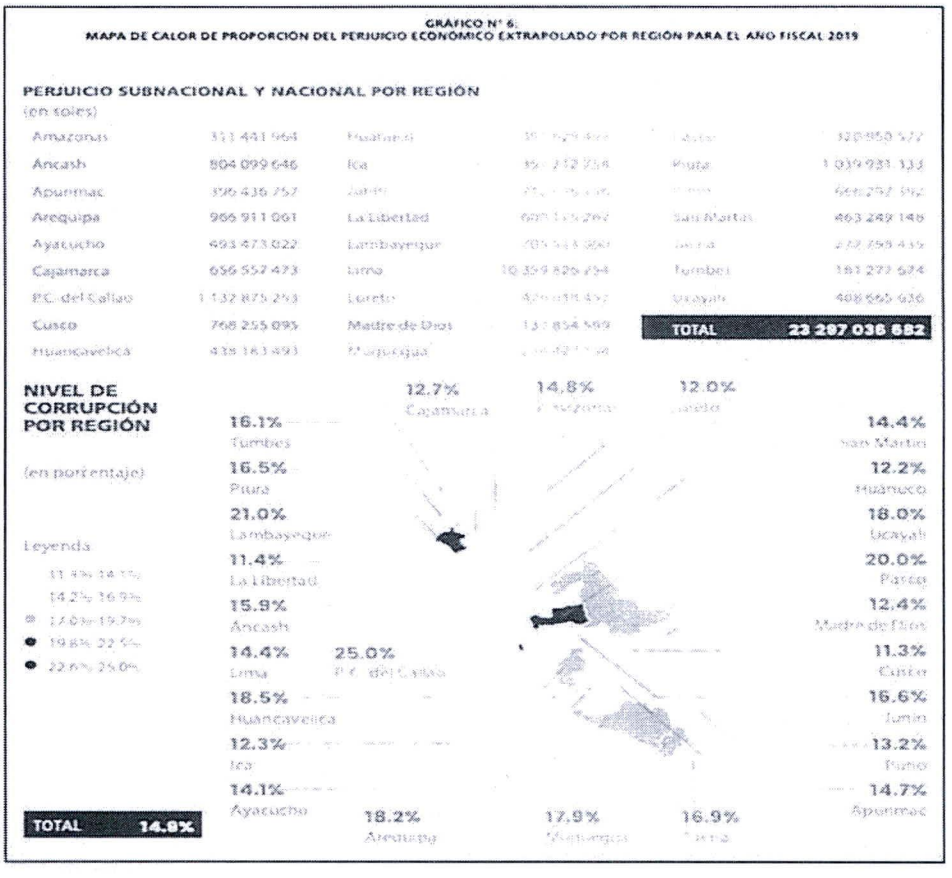
[8] https://www.proetica.org.pe/contenido/xi-encuesta-nacional-sobre-percepciones-de-la-corrupcion-en-el-peru-2019/

Al respecto, según un informe de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción emitido en mayo del 2018, existían 4,225 casos por delitos de corrupción que involucran a 2,059 autoridades y ex autoridades subnacionales en condición de imputados, incluyendo 57 gobernadores o ex gobernadores regionales, 344 alcaldes o ex alcaldes provinciales y 1,658 alcaldes o ex alcaldes distritales.[9]

Sobre el mismo tema, el documento de trabajo *"Calculo del tamaño de la corrupción y la inconducta funcional en el Perú: una aproximación exploratoria"*[10] ha extrapolado el perjuicio económico ocasionado por la corrupción a nivel nacional y subnacional.

El estudio muestra que alrededor de 23.3 mil millones de soles del presupuesto público ejecutado en el 2019, es decir, *"cerca del 15%, se habrían perdido producto de irregularidades en el uso del presupuesto ejecutado en dicho año"*[11], lo que representa alrededor del 3% del Producto Bruto Interno (PBI) de 2019, lo que ubica al Perú un punto porcentual por encima del promedio mundial, de acuerdo con la estimación promedio a nivel mundial efectuada por el FMI en pago de sobornos.

GRÁFICO N° 6:
MAPA DE CALOR DE PROPORCIÓN DEL PERJUICIO ECONÓMICO EXTRAPOLADO POR REGIÓN PARA EL AÑO FISCAL 2019



[9] Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción. (2018). La corrupción en los gobiernos regionales y locales. Informe temático. Lima: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Disponible en: https://procuraduriaanticorrupcion.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2018/09/LA-CORRUPCI%C3%93N-ENGOBI ERNOS-REGIONALES-Y-LOCALES. pdf

[10] Shack, N., Pérez, J

11 Idem

Un factor que debe considerar, además de las pérdidas por corrupción, es el bajo porcentaje de ejecución presupuestal que presentan los gobiernos subnacionales. Tomando como referencia la información del *SIAF a febrero 2021*[12], el análisis del devengado a diciembre de 2020 comparado con el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) a junio de 2020, de las entidades del Estado para conocer su nivel de ejecución presupuestal, incluyendo solo la *Genérica De Gasto: I. Bienes Y Servicios Y II. Adquisición De Activos No Financieros*, se tienen los siguientes resultados:

A. Para el caso de los gobiernos regionales:

- El nivel de ejecución promedio es de 84.46%
- De los 25 gobiernos regionales analizados, ***7 tienen un nivel de ejecución de 100%*** (San Martín, Moquegua, Amazonas, Arequipa, Puno, Cusco y Huánuco), ***9 tienen un nivel entre 99% y 87%*** (Callao, Madre de Dios, Tacna, Ucayali, Apurímac, Pasco, Ayacucho, Lima y Junín) ***y 9 tienen un nivel de ejecución presupuestal menor a 87%*** (Lambayeque, Huancavelica, La Libertad, Loreto, Piura, Ancash, Tumbes, Ica y Cajamarca)
- 2 gobiernos regionales que tienen un nivel de ejecución presupuestal menor al 50%: El Gobierno Regional de Ica (48%) y el Gobierno Regional de Cajamarca (44%).

B. Para el caso de Municipalidades Distritales diferentes a Lima Metropolitana

- El nivel de ejecución promedio es de 76.63%
- De las 1655 municipalidades analizadas, ***204*** *tienen un nivel de ejecución de* ***100%, 747*** tienen un nivel entre ***99% y 76%,*** y ***704*** tienen un nivel de ejecución presupuestal menor a 76%.
- Existen 2 municipalidades que tienen un nivel de ejecución presupuestal menor al 20%, como son la Municipalidad Distrital de Ayo (19%) y la Municipalidad Distrital de la Esperanza – Santa Cruz (14%).

C. Para el caso de municipalidades provinciales:

- El nivel de ejecución promedio es de 67.53%
- De las 195 municipalidades provinciales analizadas, 12 tienen un nivel de ejecución de 100%, 86 tienen un nivel entre 99% y 68%, y 97 tienen un nivel de ejecución presupuestal menor a 67%.
- Existen 2 municipalidades que tienen un nivel de ejecución presupuestal menor al 30%, como son la Municipalidad Provincial de Castilla (21%) y la Municipalidad Provincial de General Sánchez Cerro (21%).

[12] SIAF. Consulta amigable al 04 de febrero de 2021.

Análisis Devengado a Dic 2020 vs PIM Jun 2020 (Incluye solo genéricas Bienes y Servicios y Adquisición de activos no financieros)	
Tipo de Entidad	**Promedio**
Ministerios	99.09%
Otros Pliegos del Gobierno Nacional	95.77%
Ejecutoras del Gobierno Nacional	92.72%
Gobierno Regional	84.46%
Ejecutoras del Gobierno Regional	96.67%
Municipalidad Distrital Lima Metropolitana	86.74%
Municipalidades Distritales de Provincia	76.63%
Municipalidades Provinciales	67.53%
Promedio Total	**87.45%**

Cuando se incluyen todas las *Genéricas De Gasto*, se tienen los siguientes resultados:

A. Para el caso de los gobiernos regionales:

- El nivel de ejecución promedio es de 63.22%
- De los 25 gobiernos regionales analizados, ***1 tiene un nivel de ejecución sobre 90%*** (Moquegua), ***11 tienen un nivel entre 60% y 85%*** (Ayacucho, Tacna, Loreto, Huánuco, Amazonas, San Martin, Lima, Puno, Arequipa, La Libertad, Apurímac) ***y 13 tienen un nivel de ejecución presupuestal menor a 60%.***
- 2 gobiernos regionales que tienen un nivel de ejecución presupuestal menor al 50%: El Gobierno Regional de Ica (48%) y el Gobierno Regional de Cajamarca (44%).

B. Para el caso de Municipalidades Distritales diferentes a Lima Metropolitana

- El nivel de ejecución promedio es de 75.91%
- De las 1655 municipalidades analizadas, ***204*** *tienen un nivel de ejecución de* ***100%, 747*** tienen un nivel entre ***99% y 76%,*** y ***704*** tienen un nivel de ejecución presupuestal menor a 76%.

C. Para el caso de municipalidades provinciales:

- El nivel de ejecución promedio es de 86.41%
- De las 195 municipalidades provinciales analizadas, **84** *tienen un nivel de ejecución de 100%*, **97** tienen un nivel entre 98% y 61%, y **14** tienen un nivel de ejecución presupuestal menor a 59%.

Análisis Devengado a Dic 2020 vs PIM Jun 2020 (Incluye todas las genéricas de gasto)	
Tipo de Entidad	**Promedio**
Ministerios	88.09%
Otros Pliegos del Gobierno Nacional	78.02%
Ejecutoras del Gobierno Nacional	86.11%
Gobierno Regional	63.22%
Ejecutoras del Gobierno Regional	93.61%
Municipalidad Distrital Lima Metropolitana	81.92%
Municipalidades Distritales de Provincia	75.91%
Municipalidades Provinciales	86.41%
Promedio Total	**81.66%**

Considerando esa problemática, la fiscalización como mecanismo ejercido directamente, tanto por consejeros regionales y regidores municipales en cumplimiento de sus funciones atribuidas legalmente, y que les permite realizar labores de vigilancia, seguimiento, auditoría, supervisión, control y evaluación, debe ser fortalecida, tanto en la posibilidad de acceder a la información de la gestión, como en el necesario financiamiento para el despliegue de sus labores de fiscalización. Ello, a efecto de evitar posibles excesos en las decisiones que se tomen por parte de los titulares de dichas entidades.

Tanto la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 27867; como la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, establecen las atribuciones de consejeros regionales y regidores municipales respectivamente, relacionadas a la fiscalización de los actos de los órganos de dirección y administración de sus respectivas entidades. Sin embargo, las normas citadas no han precisado el procedimiento de cómo debe llevarse a cabo dicha fiscalización, específicamente en lo referido a la atención de los pedidos de información que realizan los consejeros y regidores, así como tampoco se han especificado los recursos que podrían disponer para el desarrollo de su función fiscalizadora.

Teniendo en cuenta que dichas entidades administran recursos públicos y que son los consejeros y regidores quienes, en cumplimiento de sus funciones deben velar por el buen manejo de ellos, resulta necesario fortalecer su función fiscalizadora más aún cuando el impacto de este vacío legal, en un contexto de creciente preocupación por la falta de transparencia y acusaciones de corrupción, resulta crucial.

Respecto de la lucha contra la corrupción y del control de la administración de recursos públicos, la Contraloría General de la República cumple un papel preponderante. En ese contexto, el artículo 16 de la Ley N° 27785, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control (en adelante Ley N° 27785 o Ley Orgánica), establece que la Contraloría General tiene por misión, además de dirigir y supervisar con eficiencia y eficacia el control gubernamental, ***contribuir con los Poderes del Estado en la toma de decisiones y con la ciudadanía para su adecuada participación en el control social.***

En esa misma línea, el artículo 17 de la Ley Orgánica señala que las entidades sujetas a control tendrán necesariamente un Órgano de Control Institucional (en adelante OCI) el cual constituye la unidad especializada responsable de llevar a cabo el control gubernamental en la entidad. Según la norma citada, este órgano mantiene una relación funcional con la Contraloría General efectuando su labor de conformidad con los lineamientos y políticas que para tal efecto aquella establezca.

La Ley N° 30742, Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control, autorizó en su Tercera Disposición Complementaria Final, la incorporación de los OCI de las entidades de Gobierno Nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales a la Contraloría, para fortalecer la "capacidad sancionadora del Estado frente a los actos de corrupción", por lo que, para mejorar la participación de los funcionarios del OCI y el seguimiento a las acciones de los gobiernos subnacionales, es necesario promover su participación en las sesiones de los concejos municipales y consejos regionales, al menos en algunas oportunidades.

En ese contexto, este proyecto de ley plantea modificaciones respecto del establecimiento de plazos y la dotación de recursos específicos para que los regidores puedan ejecutar acciones de fiscalización sin demoras o posibles trabas, fortaleciendo así la capacidad fiscalizadora de los consejos regionales y concejos municipales, así como el de los Órganos de Control Institucional para un mejor trabajo de prevención desde la Contraloría General de la República.

III. PROPUESTAS DE SOLUCIÓN

Las principales propuestas y modificaciones se pueden resumir, de acuerdo al siguiente detalle:

3.1 SOBRE LA ATRIBUCIÓN DE REALIZAR PEDIDOS DE INFORMACIÓN

El artículo 194 de la Constitución establece que las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La estructura orgánica del gobierno local la conforman el Concejo Municipal como órgano **normativo y fiscalizador** y la Alcaldía como órgano ejecutivo, con las funciones y atribuciones que les señala la ley.

Igualmente, respecto de los gobiernos regionales, el artículo 191 de la Constitución les reconoce autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; estableciendo al Consejo Regional como órgano **normativo y fiscalizador**, y al Gobernador como órgano ejecutivo.

Para que estas funciones sean cumplidas adecuadamente por regidores y consejeros, especialmente la función de fiscalización, sin ningún tipo de traba para su ejercicio, se hace necesario clarificar la atribución prevista para el Concejo Municipal y para el Consejo Regional respecto de la aprobación de pedidos de información, así como el plazo límite para su atención.

En el 2007, en la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos

Locales y Modernización de la Gestión del Estado del Congreso de la República se conformó un grupo de trabajo para la "Revisión de la Ley Orgánica de Municipalidades" con el objeto de contrastar la aplicación práctica de la Ley N° 27972 con los vacíos y deficiencias que se habían presentado desde su promulgación y entrada en vigor.[13] Uno de los puntos del Informe está referido a los ***pedidos de información de los regidores***, al respecto de lo cual el Grupo de Trabajo señala "que *el objetivo inicial del dispositivo legal analizado era que, al aprobarse los pedidos de información de los Regidores en el concejo municipal, éstos no pudieran ser denegados por ninguna otra instancia administrativa de la municipalidad*". Sin embargo, en la práctica está disposición viene siendo interpretada en el sentido de que es necesario que el Concejo Municipal apruebe mediante votación la atención del pedido de información formulado por un regidor "*con lo cual, al miembro del Concejo, que tiene entre sus funciones constitucionales la de fiscalización, se le concede un derecho menor que el de cualquier ciudadano, quien puede acceder casi sin restricciones a la información de la municipalidad*".

Al respecto, el Tribunal Constitucional (STC 007-2003-AI/TC)[14] se ha pronunciado sobre la distinción entre el derecho a la información (Art. 2, numeral 5 de la Constitución) y la atribución de formular pedidos de información de los regidores como parte del ejercicio de su función de fiscalización. El Tribunal considera que *"la diferencia entre las facultades o prerrogativas (incluso las potestades) y los derechos o libertades es que, mientras aquellos le corresponden al Estado o, en particular, a sus funcionarios o autoridades, estos le pertenecen a las personas naturales o jurídicas, según sea el caso"*. Mientras en el primer caso es considerado un derecho fundamental consagrado en la Constitución y que no requiere ninguna motivación; en el segundo caso, se considera una atribución motivada por una voluntad expresa de control.

Esta sentencia ha intensificado las barreras para el desarrollo de la función de fiscalización de los regidores, pues el término "autorizar" está siendo interpretado como la necesidad de someter a votación del concejo municipal los pedidos que formulan los regidores; hecho que atenta contra la función constitucional que tienen los regidores.[15]

Estos mismos criterios se han venido aplicando a los Gobiernos Regionales, más aún si la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales no ha previsto entre los derechos de los consejeros la posibilidad de formular pedidos de información para efectos de fiscalizar la gestión regional.

Por lo expuesto, resulta de vital importancia que la Ley contemple las garantías mínimas indispensables para que regidores y consejeros puedan, efectivamente, solicitar y contar con información sobre la gestión, así como recursos para ejercer a cabalidad la función de fiscalización atribuida por ley.

---

[13] Informe del Grupo de Trabajo para la "Revisión de la Ley Orgánica de Municipalidades" - Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado del Congreso de la República. 2007.

[14] Exp. Nº 007-2003-AI/TC LIMA. Demanda de Inconstitucionalidad interpuesta por la Municipalidad Provincial de Sullana contra el art. 9º numeral 22, de la Ley Nº 27972. Recuperado de https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/00007-2003-AI%20Admisibilidad.html

[15] Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas – Diplomado en Gestión Municipal. Comentarios sobre la Ley Orgánica de Municipalidades – Julio César Castiglioni Ghiglino

a. Plazos para la atención de pedidos de información

La modificación del artículo 10 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y la modificación del artículo 16 de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, buscan fortalecer los mecanismos que tiene el Consejo Regional y el Concejo Municipal para constituirse en la principal instancia de control del órgano Ejecutivo del Gobierno Regional y Municipalidad, respectivamente.

Para fortalecer la función de fiscalización de los gobiernos regionales y de las municipalidades se hace necesario mejorar los procedimientos referidos a los pedidos de información hechos por los consejeros regionales y regidores municipales, los cuales se consideran deben ser atendidos por la gestión dentro de un plazo razonable de 10 días hábiles, bajo responsabilidad administrativa de los funcionarios y/o servidores públicos que no cumplan con proporcionar la información dentro de los plazos máximos establecidos.

Para hacer efectiva esta propuesta, respecto de los Consejeros Regionales, se agregará un nuevo literal (e) en el artículo 16° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, para que los consejeros tengan entre sus atribuciones la posibilidad de formular pedidos de información para así poder fiscalizar la gestión regional, seguido también de una precisión del plazo legal para atender dichos pedidos. Asimismo, se incluye un párrafo final referente a los recursos con que contarán los regidores para el ejercicio de sus atribuciones.

Para el caso de los regidores municipales, se propone modificar el numeral 2 del artículo 10 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley - N° 27972, para establecer que la atribución de formular pedidos debe ser atendida en un plazo máximo. Asimismo, se incluye un párrafo final referente a los recursos con que contarán los regidores para el ejercicio de sus atribuciones.

Se establece también, que los consejeros regionales y regidores municipales podrán desarrollar las acciones de fiscalización necesarias de manera inopinada, sin que pueda exigírseles comunicación previa sobre su realización.

b. Establecimiento de un fondo específico para el ejercicio de la función de fiscalización

La función de fiscalización es una función clave tanto de los regidores municipales como de los consejeros regionales, pues tiene como finalidad transparentar la gestión pública verificando que las acciones que realicen ambas gestiones se desarrollen dentro de marcos legales, y que los recursos públicos se destinen a atender prioridades de desarrollo local.

La labor fiscalizadora de los consejeros regionales y regidores municipales implica el uso de recursos económicos o materiales, por ejemplo, para cubrir su desplazamiento a distintas partes de la región, provincia o distrito, según sea el caso, lo que hace necesario que dispongan de recursos que les permitan

realizar con eficacia las acciones que se planteen para verificar el cumplimiento de las normas, así como el correcto uso y custodia de los bienes públicos.

En la actualidad, ni los gobiernos regionales ni las municipalidades cuentan con una partida específica para implementar las acciones de fiscalización que realicen los consejeros y regidores, ya sea individualmente o aquellas que se acuerden en las comisiones constituidas con esa finalidad; hecho que en la práctica resulta en la imposibilidad de que se cumplan las actividades necesarias.

En esa línea, es importante precisar que la Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control, Ley N.° 30742, publicada el 28 de marzo del 2018, autorizó en la Tercera Disposición Complementaria la incorporación de los Órganos de Control Institucional - OCI de las entidades de los gobiernos subnacionales de manera progresiva a la Contraloría General de la República; en ese contexto se plantea que la partida municipal correspondiente a la *actividad 5000006: Acciones de Control y Auditoria*, que eran asignados al OCI para el pago de profesionales, previo a su incorporación a la Contraloría General, se mantenga a efectos de que los gobiernos subnacionales puedan destinar dicha partida para uso de los consejeros y regidores.

Pese a que desde la entrada en vigencia de la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, todas las municipalidades a nivel nacional tenían la obligación de implementar un órgano de control institucional, a la fecha aún existen municipalidades distritales en las que no se han implementando dichos órganos; por lo que para posibilitar el acceso a recursos por parte de los regidores de estas entidades se requiere establecer un fondo especial; el mismo que estará constituido por el 0.5%, como mínimo, del presupuesto devengado del año precedente. Para cumplir con esta finalidad, se plantea que los gobiernos locales distritales puedan realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, quedando exceptuados de las restricciones presupuestarias establecidas en las leyes anuales de presupuesto.

Estas medidas permitirán el ejercicio oportuno, efectivo y eficiente del rol fiscalizador con que cuentan legalmente, tanto regidores como consejeros, sin demandar recurso adicional al tesoro público.

Por otro lado, al tratarse de un fondo constituido con recursos públicos y para fortalecer la transparencia en el accionar de regidores y consejeros, se plantea que el uso de los recursos de este fondo esté sujeto a control por parte de la Contraloría General de la República, como ente rector del Sistema Nacional de Control.

Para ello, se propone que tanto los Concejos Municipales como los Consejos Regionales, elaboraren el Informe conteniendo el *Balance Anual de ejecución presupuestaria del Fondo de Fortalecimiento de la Función de Fiscalización;* el mismo que será publico, debiendo aparecer en la página web oficial de la entidad y deberá ser presentado semestralmente a la Contraloría General, mediante el sistema que esta entidad implementará con dicha finalidad.

c. Sobre la obligatoriedad de la ejecución de los acuerdos de los Concejos Municipales y de los Consejos Regionales

Los acuerdos de los Concejos Municipales y de los Consejos Regionales son instrumentos jurídicos mediante los cuales estos órganos ejercen sus funciones normativa y fiscalizadoras.

Respecto de los acuerdos, la Ley Orgánica de Municipalidades, establece que *"son decisiones, que toma el concejo, referidas a asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional"*, cuya ejecución le corresponde al titular de la entidad.

En el caso de los Gobiernos Regionales, la Ley Orgánica correspondiente, establece que los acuerdos "expresan la decisión de este órgano sobre asuntos internos del Consejo Regional, de interés público, ciudadano o institucional o declara su voluntad de practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional". Su ejecución es atribución del Gobernador Regional.

En la práctica, muchos de los acuerdos adoptados por los órganos normativos de los gobiernos subnacionales se quedan sin ser ejecutados; influyendo negativamente en el desarrollo de acciones de cada entidad de gobierno regional y local, pero sobre todo en el cumplimiento de acciones de fiscalización propuestas por los consejeros y regidores. Estos hechos han sido expuestos en las diferentes reuniones y mesas de trabajo en las que ha participado la Contraloría General de la República.

Al ser los acuerdos, los instrumentos que expresan las decisiones de los órganos normativos de los gobiernos subnacionales en determinado sentido, es necesario que estas decisiones se lleguen a ejecutar; bajo responsabilidad de los funcionarios que sus leyes orgánicas prevén.

Para ello, se plantea que las decisiones contenidas en los acuerdos que hayan sido aprobados por al menos las dos terceras partes del número legal sean de obligatorio cumplimiento y que en los casos de acuerdos que necesiten distintas acciones para su cumplimiento, se incluya un Plan de Implementación, estableciendo detalladamente que acciones se realizarán, los plazos en los que deben realizarse dichas acciones y los mecanismos de financiamiento que se emplearán para el desarrollo de dichas acciones, de ser el caso.

El Plan de Implementación deberá ser remitido al Órgano de Control Institucional (OCI) de la entidad, dentro de los 3 días hábiles siguientes de su aprobación, para que sea éste quien realice el control correspondiente sobre su cumplimiento.

d. Sobre la derogatoria del numeral 22 del artículo 9 de la Ley Orgánica de Municipalidades

La Ley Orgánica de Municipalidades en su artículo 9 ha establecido entre las atribuciones del Concejo Municipal la de *"autorizar y atender los pedidos de*

información de los regidores para efectos de fiscalización"; generando una aparente contradicción que incorrectamente interpretada limita el derecho de los regidores a ejercer su función fiscalizadora.

Con esta disposición, se habría disminuido el poder de los regidores para constituirse en un primer nivel de control al interior de dichas entidades,[16] generando un efecto contrario al que motivó su inclusión en la Ley.

En diferentes municipalidades a nivel nacional se presentan constantes denuncias por trabas a la función fiscalizadora de los regidores, que en su mayoría están referidas a que los alcaldes no ponen en agenda los pedidos de los regidores, y además que los Concejos no ponen a votación y menos aún, aprueban a trámite los pedidos de información.

El hecho que los alcaldes en el Perú sean elegidos con mayoría automática, podría hacer posible que la mayoría oficialista no ponga prioridad en la labor de fiscalización de todos los regidores. Esta atribución es aprovechada por algunas gestiones municipales cuando regidores de oposición solicitan información para realizar tareas de fiscalización, debido a que dichos pedidos, al ser sometidos al Concejo para autorización, pueden ser desestimados o demorados, pues necesitan de la mayoría de los miembros para aprobar su procedencia.

En ese sentido, con la finalidad de fortalecer la capacidad fiscalizadora de los regidores, se plantea eliminar la barrera legal que actualmente les impide, el desempeño efectivo de su función de fiscalización. Para el caso, de los Gobiernos Regionales se plantea incluir entre sus derechos el de formular pedidos con fines de fiscalización, dado que no cuenta con dicha atribución en su Ley Orgánica.

3.2 SOBRE EL FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN EJECUTORA EN LOS CONSEJOS REGIONALES Y CONCEJOS MUNICIPALES

a. De la aprobación de compras directas

De acuerdo con la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y con la Ley Orgánica de Municipalidades, los titulares de dichas entidades (Gobernador Regional y alcaldes provinciales/distritales) constituyen el órgano ejecutivo y la máxima autoridad administrativa; mientras que el Consejo Regional y el Concejo Municipal constituyen los órganos normativo y fiscalizador en cada caso. Igualmente, tanto el Consejo Regional como el Concejo Municipal constituyen órganos colegiados, cuyas decisiones se adoptan por mayoría, de acuerdo con lo previsto por sus respectivas Leyes Orgánicas.

La Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225 establece para el caso de compras directas, que la contratación de bienes, servicios u obras, una vez iniciada la ejecución contractual, deben ser aprobadas por el correspondiente Consejo Regional o Concejo Municipal. Sin embargo, no se ha tenido en cuenta que la contratación de bienes y servicios se encuentra entre las atribuciones administrativas reconocidas a los titulares de las entidades de Gobiernos

[16] Muñoz, P. (2005). El diseño institucional municipal 1980-2004 y sus implicancias para las zonas rurales. Lima: Asociación Servicios Educativos Rurales: 53-58

Regionales y Locales, como es la de "*celebrar los actos, contratos y convenios necesarios para el ejercicio de sus funciones*"; en ese sentido, sujetar el procedimiento de compras directas a la aprobación del órgano normativo de los gobiernos subnacionales desnaturaliza la función de dichos órganos, reconociéndoles una función administrativa que no poseen.

Además, el trámite se constituye en una traba al ejercicio de las atribuciones de los titulares de los gobiernos subnacionales, pues por la naturaleza fiscalizadora de órganos colegiados de los gobiernos regionales y locales estos requieren mayor plazo para analizar la información presentada para aprobar las contrataciones, por lo que el procedimiento de aprobación demanda tiempos adicionales, y estarían asumiendo funciones administrativas, que no les han sido reconocidas por ley.

Dado que uno de los requisitos fundamentales que configuran las contrataciones directas es la "inmediatez", pues estas tienen como finalidad atender situaciones especiales que, como consecuencia de la exigencia legal de aprobación por el órgano correspondiente, vienen generando retrasos en la contratación de bienes y servicios que pueden resultar esenciales, especialmente en situaciones excepcionales, se plantea que en los gobiernos regionales y municipales las compras directas sean aprobadas directamente por sus titulares sin requerir la aprobación de sus órganos fiscalizadores y sin perjuicio de la rendición de cuentas y fiscalización posterior que resulte necesario disponer.

3.3 SOBRE LOS MECANISMOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES

La rendición de cuentas es un mecanismo de transparencia que permite informar a la ciudadanía respecto de los logros y los aspectos más importantes de la gestión pública. En el caso de los gobiernos regionales y locales se han establecido algunos mecanismos de rendición de cuentas como las audiencias públicas que tienen por objetivo *"dar cuenta de la gestión en el nivel regional y local, no solamente de los aspectos presupuestales, sino, principalmente, de los logros de la gestión y de las dificultades que impidieron el cumplimiento de algunos compromisos"*[17]. Estas audiencias constituyen el medio, casi por excelencia, para que los gobiernos subnacionales transparenten su gestión.

En el caso de los Gobiernos Regionales, el artículo 24° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales dispone que dichas entidades deben realizar, como mínimo, dos audiencias públicas al año, una en la capital de la región y otra, en una provincia, en las que se debe dar cuenta de los avances y loros de la gestión. A través de este mecanismo, los gobiernos regionales tienen la oportunidad de dar cuenta ante la población sobre la ejecución de su presupuesto, atendiendo al mandato constitucional, pero también sobre los logros y dificultades presentados durante su gestión.[18]

Para los gobiernos locales no existe una disposición similar en su ley orgánica,

---

[17] Transparencia - Gobierno Abierto Fascículo 1. Programa de fortalecimiento de capacidades en materia de Gobierno Abierto dirigido a gobiernos regionales y locales. Secretaría de Gestión Pública. Presidencia del Consejo de Ministros. Revisado en https://sgp.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2015/01/Fasciculo-1-Transparencia.pdf

[18] Participación ciudadana y rendición de cuentas - Fascículo 3. Programa de fortalecimiento de capacidades en materia de Gobierno Abierto dirigido a gobiernos regionales y locales. Secretaría de Gestión Pública. Presidencia del Consejo de Ministros. Revisado en

sin embargo, la Constitución Política del Perú en su artículo 199º dispone que tanto los gobiernos regionales y locales formulan sus presupuestos con participación de la población y *"rinden cuenta de su ejecución, anualmente, bajo responsabilidad, conforme a ley"*. En consecuencia, si bien existe la obligación constitucional de que los gobiernos locales rindan cuenta de su ejecución presupuestal, al menos una vez al año, *"es opinión generalizada que debieran realizar, al menos, dos audiencias de rendición de cuentas, siempre sobre el uso de los recursos públicos, pero, además, sobre los logros y dificultades en la obtención de los objetivos propuestos por la gestión"*[19] y que dicha disposición esté contemplada en la propia Ley Orgánica de Municipalidades.

En ambos casos, con la finalidad de fortalecer este mecanismo de transparencia es necesario que estas audiencias se celebren obligatoriamente en los meses de mayo y setiembre, permitiendo evaluar la ejecución presupuestal, así como la proyección de ejecución la entidad al cierre de año.

3.4 SOBRE EL FORTALECIMIENTO DE LA LUCHA CONTRA LA INCONDUCTA FUNCIONAL

a. Requisitos para la Contratación de Personal de Confianza

Como parte del Operativo "Designación de funcionarios en cargos de confianza en los gobiernos regionales y locales", realizado en el 2019 por la Contraloría General de la República, se identificó a 2,609 funcionarios designados en cargos de confianza en 289 entidades públicas a nivel nacional que no cumplían o no acreditaban cumplir con los perfiles establecidos en su Manual de Organización y Funciones (MOF), Manual de Perfiles de Puestos (MPP) y/o Clasificador de Cargos, esta cifra representa el 34% de los 7,574 funcionarios designados en cargos de confianza de 332 entidades (25 gobiernos regionales y 307 gobiernos locales) intervenidas.

Ello significa que 289 de los 332 gobiernos locales y regionales intervenidos contrataron personal de confianza que no cumple con los requisitos del perfil del puesto que desempeñaban, hecho que debilita el servicio meritocrático pues no asegura que el personal más preparado para cada puesto sea el contratado y que incide negativamente en el cumplimiento de objetivos institucionales, así como en la profesionalización de la función pública que busca generar valor público en beneficio del ciudadano.

Para que no se repitan los hechos descritos, el proyecto propone establecer específicamente que, en los casos de contratación de personal de confianza, el incumplimiento de los requisitos establecidos en el perfil de cada puesto acarreará responsabilidad administrativa por parte del titular de la entidad.

b. Modificación a la designación del Secretario Técnico del Procedimiento Administrativo Disciplinario y del Coordinador de la Unidad Funcional de Integridad Institucional, previsto en la presente ley

Con la publicación de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil (LSC), se estableció

[19] Idem.

un sistema meritocrático para acceder al servicio público, y mantener una administración pública que adopte un estándar eficiente y eficaz.

Se instauró también un sistema disciplinario que permite delimitar la conducta del servidor, directivo y funcionario público en la administración pública, en el que la primera instancia se ha subdividido en dos etapas diferenciadas, a cargo de órganos diferenciados: la etapa de instrucción y la etapa de sanción, dando origen a la creación de la **"Secretaría Técnica de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios"**, como órgano de apoyo a las autoridades del Procedimiento Administrativo Disciplinario (en adelante PAD).

Si bien las funciones del Secretario Técnico no están claramente delimitadas, dado que, por un lado, la Ley Nº 30057 señala que es un órgano de apoyo de todas las etapas del PAD; mientras que su reglamento establece una delimitación circunscrita a ser apoyo de los órganos instructores del PAD; entre ellas están la de *"asistencia o apoyo abarca también la revisión, evaluación y análisis de los documentos, descargos y/o medios de prueba ofrecidos por el o los imputados en un procedimiento administrativo disciplinario, a afectos de que con pleno conocimiento del contenido de los expedientes administrativos disciplinarios pueda proponer la fundamentación de los informes de los órganos instructores y sancionadores*[20].

A pesar de que según la Directiva N° 02-2015- SERVIR/GPGSC "Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil", el órgano instructor podría apartarse de las conclusiones del informe de precalificación del Secretario Técnico, argumentando en ambos casos las razones de su decisión, la responsabilidad de estos funcionarios en el desarrollo de los procedimientos sancionadores hace necesario preservar su autonomía funcional.

Por ello, se plantea que los secretarios técnicos en los casos de los gobiernos subnacionales no sean designados directamente por el titular de la entidad; si no más bien por acuerdo de consejo regional en el caso de los Gobiernos Regionales, y por acuerdo de Concejo Municipal en el caso de gobiernos locales; estos funcionarios serán designados por el plazo de dos (02) años, renovables por el mismo periodo.

Con la misma finalidad, se propone que sea el titular de la entidad es decir el Gobernador regional o el Alcalde, quien designe al Coordinador de la Unidad Funcional de Integridad Institucional.

c. Sobre la participación de los Órganos de Control Institucional en las Sesiones de Concejo Municipal y Consejo Regional.

La Contraloría General como organismo constitucionalmente autónomo, reconocido en el artículo 82 de la Constitución Política del Perú, forma parte del funcionamiento del Estado peruano, específicamente en lo concerniente al control de la ejecución presupuestal, de las operaciones de la deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas a control.

---

[20] Informe Técnico Nº 1669-2019-SERVIR/GPGSC, recuperado en https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1371971/Informe%20T%C3%A9cnico%201669-2019-SERVIR-GPGSC.pdf

Con la finalidad de tener un sistema de control moderno, la Ley Nº 30742, Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control, autorizó la incorporación de los OCI de las entidades de gobiernos regionales y locales a la Contraloría, con la finalidad de lograr una efectiva articulación entre las instituciones del Estado, el funcionario público, y la opinión pública organizada. Esta articulación implica que la Contraloría General desempeñe un rol más participativo al interior de los gobiernos regionales y locales, proporcionando la guía requerida, para que dichas instituciones implementen un sistema de control interno eficiente y puedan responder con probidad ante las necesidades del control gubernamental.

Para ello, se hace necesario establecer que los jefes de los OCI de los Gobiernos subnacionales participen obligatoriamente, al menos una vez al mes en las sesiones ordinarias de concejo municipal y de consejo regional, para poder conocer los hechos y denuncias presentados y que estos sean considerados entre las acciones que realizan como parte del cumplimiento de sus competencias funcionales.

3.5 OBLIGACIONES DE LAS PROCURADURÍAS REGIONALES Y MUNICIPALES

Los Procuradores Públicos son funcionarios y mantienen relaciones de coordinación y cooperación con el Consejo de Defensa Judicial del Estado. Entre sus funciones está informar permanentemente al Consejo Regional y al Concejo Municipal según corresponda.

Para coadyuvar a la labor de fiscalización de los consejeros y regidores se plantea que los procuradores de los gobiernos subnacionales deberán remitir al Consejo / Concejo respectivo al menos un informe cada trimestre, conteniendo el estado de las acciones judiciales en defensa de los derechos e intereses del Estado a nivel regional y local. Además, se establece en el caso de los gobiernos locales que dichos informes tengan carácter público.

3.6 SOBRE LA CAPACITACIÓN A CONSEJEROS REGIONALES Y REGIDORES MUNICIPALES POR PARTE DE LA ESCUELA NACIONAL DE CONTROL

El literal d) del artículo 15 de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y sus modificatorias, establece que es atribución del Sistema Nacional de Control propugnar la capacitación permanente de los funcionarios y servidores públicos en materias de administración y control gubernamental, con el objetivo de consolidar, actualizar y especializar su formación técnica profesional y ética.

La Contraloría General de la República en cumplimiento de esta atribución y a través de la Escuela Nacional de Control – ENC, capacitará en materias de fiscalización y gestión pública a los consejeros regionales y regidores municipales.

Esa capacitación se realizará en el marco de lo establecido en la cuarta disposición complementaria final de la Ley N° 30742 – Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control.

3.7 SOBRE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA LA EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS FINANCIERAS EN EL MARCO DE LA AUDITORÍA A LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA

El artículo 20° de la Ley N° 30742 – Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control, hace referencia a la contratación de sociedades de auditoria para examinar las actividades y operaciones de las entidades públicas, así como para revisar la razonabilidad de sus estados financieros, evaluar la gestión, captación y uso de los recursos que les son asignados.

En ese contexto, la referida norma autoriza en su segundo párrafo, a las entidades del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales a realizar transferencias financieras con cargo a su presupuesto institucional a la Contraloría General de la República con la finalidad de cubrir los gastos que se deriven de la contratación de las sociedades de auditoria, bajo exclusiva responsabilidad del titular del pliego así como del jefe de la oficina de administración y del jefe de la oficina de presupuesto o las que hagan sus veces en el pliego.

Ante ello, y en cumplimiento de su función de fiscalización, se establece que son los consejeros regionales y regidores municipales quienes deben velar por el estricto cumplimiento de dichas normas, constituyendo su inobservancia causal de infracción grave o muy grave pasible de sanción administrativa.

3.8 SOBRE LAS EXCEPCIONES AL ACCESO A INFORMACIÓN PUBLICA, EN EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DE FISCALIZACIÓN

El artículo 2, numeral .5 de la Constitución Política garantiza el acceso a la información pública, sin embargo, precisa que *"Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional..."*

Para poder establecer la información que estaría protegida por las excepciones al acceso a la información pública, debemos conocer que tipo de información tienen en su posesión los gobiernos regionales y locales.

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP) señala sobre la información secreta que esta constituye una excepción de acceso a la información y que al igual que la información reservada, se fundamenta en la protección de la seguridad nacional. La LTAIP establece que la información "secreta" es aquella que concierne al "ámbito militar" y al "ámbito de inteligencia, sobre estos temas, los gobiernos regionales y los gobiernos locales carecen de competencias y funciones, por lo tanto, no pueden denegar información alguna amparándose en que se trate de información secreta.

En el mismo sentido, la LTAIP establece a la información reservada como otra excepción de acceso a la información, definiéndola como "aquella concerniente a la prevención y represión de la criminalidad y aquella relativa a las relaciones exteriores". Considerando que los gobiernos regionales y locales tienen funciones en materia de seguridad ciudadana y, por ello, podrían tener información referida a la prevención y represión de la criminalidad, esta podría tratarse de información reservada.

Se debe recalcar que, en todos estos casos, las funcionarias y los funcionarios que posean información secreta, reservada y confidencial tienen la obligación de evitar su divulgación según la LTAIP.

En esa misma línea, la Ley N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales (LPDP) denomina datos personales a *"toda información sobre una persona natural que la identifica o la hace identificable a través de medios que pueden ser razonablemente identificados"*. Es decir, es aquella información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica, sobre hábitos personales o de cualquier otro tipo que permite identificar o hace identificable a cualquier persona a través de medios que puedan ser "razonablemente" utilizados[21].

Sobre los datos personales relacionados con la salud, estos están referidos a la información sobre la salud física o mental, pasada, presente o pronosticada, que incluya su grado de discapacidad o información genética. Solo quien es titular de los datos personales tiene el derecho de acceder, rectificar, cancelar, oponerse y brindar un tratamiento objetivo a sus datos personales. Su representante legal, acreditado como tal, también podrá hacerlo, por lo que los gobiernos regionales y locales no podrán brindar información al respecto.

3.9 SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

La Ley de Control Interno de las entidades del Estado, Ley Nº 28716, define al Sistema de Control Interno (SCI) como el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo las actitudes de las autoridades y el personal, organizadas e instituidas en cada entidad del Estado, que contribuyen al cumplimiento de los objetivos institucionales y promueven una gestión eficaz, eficiente, ética y transparente.

El SCI tiene como objetivos de los siguientes:
- Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado, contra todo hecho irregular o situación perjudicial que pudiera afectarlos.
- Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información.
- Promover que los funcionarios y servidores del Estado cumplan con rendir cuentas por los fondos y bienes públicos que administra.
- Promover y optimizar, la eficiencia, eficacia, ética, transparencia y economía de las operaciones de la entidad, y la calidad de los servicios públicos que presta.
- Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y sus operaciones.
- Fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales.

[21] Reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales, aprobado por el Decreto Supremo N° 003-2013-JUS.

Como se ha señalado en párrafos precedentes, con la entrada en vigor de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, se estableció que tanto los gobiernos regionales como las municipalidades a nivel nacional estaban obligadas a implementar un sistema de control interno, en concordancia con la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG, al encontrarse dentro de las entidades del Estado señaladas en el artículo 3 de la Ley N° 27785.

La Contraloría General mediante Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG aprobó la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG "Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado", en adelante la directiva, se encuentra vigente desde el 20 de mayo de 2019, la cual regula el proceso que deben aplicar las entidades del Estado de los tres niveles de gobierno para implementar el SCI como una herramienta de gestión permanente, que contribuye al cumplimiento de los objetivos institucionales y promueve una gestión eficaz, eficiente, ética, transparente y el uso adecuado de los recursos públicos.

El proceso de implementación del SCI regulado por la directiva comprende el desarrollo de tres (3) ejes: Cultura Organizacional, Gestión de Riesgos y Supervisión, los cuales agrupan, para su mejor desarrollo, los componentes, principios y punto de interés del control interno.

La Quinta Disposición Complementaria Transitoria de la directiva establecía los plazos excepcionales, aplicables para los años 2019 y 2020, que debían aplicar las entidades, entre otras, de gobierno regional y local para elaborar y enviar a la Contraloría General, los entregables que evidencien la implementación del citado Sistema

Para lograr el cumplimiento de dichos objetivos, así como la adecuada gestión de los recursos públicos en los Gobiernos Regionales y en las Municipalidades Provinciales y Distritales, es necesario que se implemente y se mantenga funcionando correctamente el sistema de control interno en dichas entidades, estableciendo un plazo límite para tal actividad.

Pese a ello, aún existen entidades de gobiernos regionales y locales que no cuentan con dichos órganos, con el perjuicio económico que ello representa por la falta de control que debería realizarse al ser parte de los órganos de control interno. Por ello que, consideramos conveniente que se emita una norma con rango de ley que disponga el plazo para que las entidades de gobierno regional y local implementen el SCI, hasta el 31 de diciembre de 2021.

La implementación se hará cumpliendo con la normativa técnica emitida por la Contraloría General de la República deberá hacerse hasta antes del 31 de diciembre del 2021, siendo su inobservancia causal de infracción grave o muy grave pasible de sanción administrativa, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar.

3.10 SOBRE LA INCORPORACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI AL PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL

El Plan de Incentivos (PI) a la Mejora de la Gestión Municipal es un instrumento del presupuesto por Resultados, que se crea en marzo de 2009 mediante Ley N° 29332, y entró en operatividad en el año 2010, con la finalidad de mejorar la calidad de los servicios públicos que las municipalidades de todo el país proveen.[22]

El Ministerio de Economía y Finanzas, es el encargado, mediante decreto supremo, de establecer los criterios, procedimientos de distribución de los montos del incentivo, así como los requisitos que deben cumplir los gobiernos locales para acceder al Plan. [23]

El PI tiene como objetivo general contribuir a la mejora de la efectividad y eficiencia del gasto público en las municipalidades, vinculando el financiamiento a la consecución de resultados asociados a los objetivos nacionales.

Los referidos objetivos están detallados en el Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021, y en torno a ellos se definieron seis ejes estratégicos y se formularon las respectivas propuestas de lineamientos estratégicos, siendo uno de ellos *1. Estado y gobernabilidad,* que implica lograr que el Estado se oriente al servicio de los ciudadanos y la promoción del desarrollo, y que *el ejercicio de la función pública sea eficiente, democrático, transparente, descentralizado y participativo*, en el marco de una ciudadanía ejercida a plenitud por las personas[24].

Los objetivos del Sistema de Control Interno están directamente vinculados a la consecución de los objetivos nacionales contenidos en el Plan Bicentenario, concordantes con el Objetivo #16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU – "*Paz, justicia e Instituciones Sólidas*"; ello hace que la inclusión de la implementación y el fortalecimiento del funcionamiento del SCI deban estar incluidos como uno de los objetivos del Plan de Incentivos.

IV. ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO

La aprobación de la presente norma no genera costos adicionales al erario nacional o a alguna otra instancia de gobierno subnacional, sino más bien sería beneficioso para toda la ciudadanía a través de la transparencia de los actos de sus gobiernos locales y regionales.

En el caso del artículo que propone destinar fondos específicos para el ejercicio de la función fiscalizadora de los consejeros regionales y regidores municipales, se trata de fondos que ya cuentan los gobiernos municipales y regionales, y que luego de la incorporación de los OCI de dichas entidades a la Contraloría General de la República, de conformidad con lo dispuesto por la Ley N.° 30742 – Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control, quedarían disponibles.

Igualmente, se busca fortalecer la capacidad ejecutora del titular de los gobiernos regionales y de las municipalidades en los casos de compras directas,

---

[22] https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/migl/pi/marco_conceptual_PI.pdf
[23] Ley Nº 29332 Ley que crea el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal Art.1, numeral 1.3
[24] https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/planes/plan-bicentenario-el-peru-hacia-el-2021

así como la función de control de la Contraloría General de la República, a través de la participación de los representantes de los Órganos de Control Institucional en las sesiones de Concejo Municipal y de Consejo Regional, impulsando la transparencia en la actuación de los órganos de los gobiernos regionales y locales.

V. IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL

Las modificaciones propuestas no contravienen ninguna disposición constitucional u otra norma vigente; por el contrario esta modificatoria pretende lograr que el proceso de obtención de información para el cumplimiento del rol de fiscalización de consejeros y regidores sea más transparente en el entendimiento de que se trata de órganos que forman parte de la misma estructura orgánica, que deben tener como objetivo común desempeñar una gestión eficiente, que fortalezca los gobiernos subnacionales. Asimismo, permitirá coadyuvar a las labores de fiscalización que realicen los regidores municipales y consejeros regionales, dotando además a las entidades de mayores herramientas para mejorar su capacidad ejecutora.

VI. VINCULACIÓN CON LAS POLÍTICAS DE ESTADO DEL ACUERDO NACIONAL

La presente propuesta legislativa se enmarca en políticas de Estado fijadas en tres de los cuatro objetivos del Acuerdo Nacional, siendo estas políticas las siguientes:

Política 1: Fortalecimiento del régimen democrático y del Estado de Derecho.
Política 5: Gobierno en función de objetivos con planeamiento estratégico, prospectiva nacional y procedimientos transparentes.
Política 8: Descentralización política, económica y administrativa para propiciar el desarrollo integral, armónico y sostenido del Perú.
Política 24: Afirmación de un Estado eficiente y transparente.
Política 26: Promoción de la ética y la transparencia y erradicación de la corrupción, el lavado de dinero, la evasión tributaria y contrabando en todas sus formas.